

REDES TRANSFRONTERIZAS

SOCIEDAD, EMPLEO Y MIGRACIÓN
ENTRE NICARAGUA Y COSTA RICA

ABELARDO MORALES

CARLOS CASTRO



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO I

TRANSNACIONALISMO SOCIAL Y TERRITORIALIDAD

BINACIONAL ENTRE NICARAGUA Y COSTA RICA 23

ABELARDO MORALES

 Territorialidad y migraciones..... 46

 Migraciones y reconfiguración socioterritorial 49

CAPÍTULO II

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y SOCIOPOLÍTICAS

DE LA MIGRACIÓN 65

ABELARDO MORALES

 Estructura productiva, sujetos sociales y emigración.....76

 La plataforma urbana de la emigración..... 82

 Dinámica sociopolítica y emigración..... 94

 Mercados laborales, migración y remesas en Nicaragua 98

Migración y subsidiaridad laboral	109	
Migración y pobreza	125	
Las remesas y su impacto en lo hogares en Nicaragua	133	
Familias globalizadas por la emigración	140	
<i>Factores precipitantes e impactos de la</i> <i>emigración sobre el hogar y sus miembros</i>	160	
CONCLUSIONES	171	
BIBLIOGRAFÍA		
 CAPÍTULO III		
INFORME INSERCIÓN LABORAL Y REMESAS DE LOS		
INMIGRANTES NICARAGÜENSES EN COSTA RICA.....		181
CARLOS CASTRO VALVERDE		
 INTRODUCCIÓN		183
 Mercados laborales asimétricos.....		185
Población inmigrante en Costa Rica:		
perfil socio-demográfico		189
Inmigración laboral: cambios y especialización		199
Inmigrantes y pequeña empresa urbana		210
Inmigrantes y estrategias ante la pobreza.....		213
Perfil de los nicaragüenses que envían remesas.....		223
Elementos cualitativos y dinámica socio-laboral		235
<i>Remesas y características laborales</i>		235
Trayectoria laboral y empleos de inmigrantes.....		243
Reflexiones finales.....		251
BIBLIOGRAFÍA		255

CAPÍTULO II
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
Y SOCIOPOLÍTICAS
DE LA MIGRACIÓN

ABELARDO MORALES

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y SOCIOPOLÍTICAS DE LA MIGRACIÓN

El análisis de la emigración de población nicaragüense sugiere una reflexión sobre las particularidades del desarrollo reciente de ese país. Las emigraciones comprenden un conjunto de decisiones individuales y familiares que están determinadas por las condiciones materiales y políticas del contexto social en el cual se producen. Aunque la presión demográfica ha sido una explicación común, en el caso nicaragüense los detonantes demográficos no han sido los principales; por lo tanto, la dinámica poblacional sobre el territorio y los recursos no explica por sí sola la causalidad de los detonantes migratorios, cuyo análisis debería contemplar otras condiciones propias de la estructura social del país, su distribución socio-territorial, así como otros factores relacionados con la cultura laboral.

El territorio de Nicaragua presenta condiciones geográficas, ecológicas y geopolíticas ventajosas para un desarrollo sustentable de su población. Tiene la superficie territorial más amplia del istmo centroamericano, con 139.000 kilómetros cuadrados que incluyen a dos importantes lagos, el Lago de Nicaragua

(Lago Cacibolca) y el Lago de Managua (o lago Xolotlán). La población que habita ese territorio fue estimada en 1995 en 4,357.099 habitantes (54,4% de población urbana y 45,6% de población rural; 49,28% de hombres y 50,72% de mujeres).¹⁴ Esa población había crecido a una tasa anual de 2,9% en el quinquenio 1990-1995, por encima del promedio regional que había sido de 2,4%. La densidad de población continúa siendo la más baja de la región centroamericana (34,6 habitantes por kilómetro cuadrado)¹⁵, solo superada por Belice; ocho veces menor que la de El Salvador, país que tiene una superficie que equivale a menos de una quinta parte de la nicaragüense y desde cuyo territorio sale una alta proporción de su población hacia el exterior.

14 Las estimaciones más recientes indican que la población total de país ascendía a 4,814,800 habitantes en 1998. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 1996. Otros cálculos proyectaban que en 2000 la población había sobrepasado los 5 millones de habitantes.

15 Según PNUD: 1999.

Cuadro 1
Centroamérica: Población estimada para 1998
según zona de residencia, extensión territorial y densidad poblacional

Países	Población total (en miles)	% Población		Extensión (km ²)	Densidad (hab/km ²)
		Urbana	Rural		
Total	34.628,0	48,2	51,8	532.857	65,0
Belice	233,0	48,8	51,2	23.963	9,7
Costa Rica	3.840,0	49,5	50,5	50.900	75,4
El Salvador	6.031,0	53,5	46,5	20.935	288,1
Guatemala	10.802,0	39,0	61,0	108.889	99,2
Honduras	6.148,0	46,3	53,7	112.088	54,8
<i>Nicaragua</i>	<i>4.807,0</i>	<i>58,8</i>	<i>41,2</i>	<i>139.000</i>	<i>34,6</i>
Panamá	2.767,0	56,7	43,3	77.082	35,9

Fuente: PNUD: 1999; 1^{er}. Informe de Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.

La distribución interna de la población ha privilegiado a cuatro departamentos en la zona central de Pacífico como espacio de concentración, más de un tercio del total de habitantes se concentra en una proporción territorial que apenas corresponde al 5% de la superficie terrestre.

En contraste con la baja densidad poblacional, se observan también otras dos situaciones. Por una parte, el país presenta la tasa de crecimiento poblacional global más alta del istmo

centroamericano. Ese valor se coloca inclusive por encima del promedio de toda la región latinoamericana (entre 1971 y 1995 correspondió al 3,2% como promedio anual). A su vez, presenta las mayores concentraciones en los centros urbanos, alrededor de 59%, con una tasa de crecimiento de la población urbana del 4,1% anual en el mismo periodo. En el contexto de la guerra, algunas ciudades crecieron a una tasa promedio acumulativa entre 4,5 y 5,5% durante todo el periodo.¹⁶ En zonas rurales la densidad de población es como promedio de 15 habitantes por km², con territorios menos poblados en la Costa Atlántica y río San Juan, donde, sin embargo, en los últimos años se ha venido experimentando una presión demográfica sobre tierras de frontera agrícola. No es claro el efecto de las migraciones sobre los recursos, en especial de la tierra, en esos territorios; pero alguna evidencia recogida con base en testimonios de informantes señalan que ese fenómeno poblacional está ejerciendo una presión muy fuerte sobre los recursos de las áreas de reserva todavía existentes.

Las diferencias entre territorios del mismo país han sido constantes desde el periodo colonial.¹⁷ De acuerdo con la investigación

16 Más al respecto en OIM, INEC, UNFPA: 1997.

17 Con base en diversas metodologías y criterios de distribución espacial, se han elaborado distintas tipologías de organización del territorio de acuerdo con la potencialidad de sus recursos, a sus características agroecológica o, bien, de acuerdo con su vocación de productiva (Maldidier y Marchetti, 1996; Ramírez, 1995). De acuerdo con Maldidier y Marchetti, existen seis regiones agroecológicas que muestran las aptitudes del territorio nicaragüense y su potencial para el desarrollo económico. Dichas zonas son: las planicies y mesetas del Pacífico; el Trópico seco o semiárido; las montañas del centro-norte del país; colinas y valles de las mesetas centrales; el Trópico Húmedo; y las Zonas no aptas para la producción agropecuaria. A partir de una combinación de características agroecológicas con la zonificación socioeconómica del territorio, Maldidier y Marchetti identifican cinco macrorregiones agrarias que son: el Atlántico y nueva frontera agrícola; la Vieja frontera agrícola; el latifundio cafetalero-ganadero; la región seca; y las Planicies del Pacífico.

arqueológica y etnohistórica (Hasemann y Lara, 1994), la franja del Pacífico nicaragüense ha poseído, desde antes de su conquista por la inmigración española, rasgos distintos a las tierras altas del Centro y del Norte, así como a las tierras bajas del Caribe. La variabilidad política e intereses de potencias extranjeras también han propiciado la desintegración territorial. La estructura espacial se fue segmentado, según lógicas diferenciadas y contradictorias de intervención: las regiones del Pacífico y Centro del país, sometidas al dominio español sobre las comunidades agrícolas. En ese mismo espacio, la presencia territorial de los colonizadores ibéricos difería en razón de las características geográficas y de su ecología cultural y social de las poblaciones indígenas. Un factor condicionante de dicha presencia fue, por ejemplo, la resistencia de las comunidades indígenas a la intervención foránea y, posteriormente, a las fuerzas económicas¹⁸. En la parte oriental del país, la presencia británica impuso también un control no menos violento que en el territorio sometido al dominio español.

Tras la independencia en 1821, las diferencias territoriales no solo permanecieron, sino que se ampliaron y profundizaron. La actividad cafetalera y ganadera, junto a otros productos de exportación desarrollados posteriormente como el algodón y la caña de azúcar, se concentraron en las fértiles tierras del Pacífico, así como en las serranías del norte y centro del país; mientras que las tierras del Caribe fueron sometidas desde finales del siglo XIX,

18 Un interesante conjunto de trabajos analiza la simbiosis entre las raíces indígenas y campesinas del Pacífico y el Centro de Nicaragua, y los efectos culturales de diversas lógicas de intervención socioterritorial, comenzando por la conquista y colonia ibérica, hasta el somocismo, la revolución sandinista y las transformaciones neoliberales de contrarreforma (Gabriel y otros, 1993: El universo de la tierra. Las culturas campesinas en el Pacífico y Centro de Nicaragua, Editorial Universitaria, UNAN, Managua).

prácticamente hasta el presente, a las dinámicas de una “economía de enclave” (Vilas,1990); controlada por empresas extranjeras, con escasos niveles de organización económica local, esa economía de enclave mantiene vínculos externos mucho más fuertes que los que desarrolla con la sociedad local (pp. 99-100).¹⁹

En Nicaragua se concentra el mayor porcentaje de población urbana de toda Centroamérica; en contraste, tiene la economía más dependiente del sector agropecuario y la más baja diversidad en actividades no agrícolas. Por otra parte, prevalece una desigual distribución del ingreso. Ese proceso se aceleró después de 1990, como consecuencia de la contracción del empleo en el sector público, de la recesión productiva que afecta al sector formal de la economía y limitaciones en la capacidad de absorción de actividades de supervivencia existentes en el sector informal y en la agricultura.

La dinámica migratoria en Nicaragua ha tenido diversas manifestaciones entre los periodos del desarrollo socioprodutivo del país. Al menos, en el desarrollo de la agroexportación se han distinguido tres momentos. Antes de la década de los cincuenta, se mantenía concentrado en torno a dos productos: café y banano. En otro momento, poco antes de mediados de siglo y hasta finales de la década de los setenta, cambió la composición de la producción agrícola con la introducción y diseminación de nuevos

19 Ese mismo autor, argumentaba que “la distinta manera de desarrollarse el capitalismo en una y otra región del país, se complementó con elementos políticos internos e internacionales que ahondaron la diferenciación y abonaron el terreno para el surgimiento de contradicciones que se presentarían posteriormente. (...) la lucha por la constitución de la territorialidad como espacio de desenvolvimiento del proyecto de dominación social de ciertos grupos y fracciones, habría de ser una constante en la formación del Estado nicaragüense a lo largo del siglo XIX” (p. 39).

cultivos. En las décadas ochenta y noventa, se comenzaron a manifestar los síntomas de una recesión que ha funcionado como detonante de los flujos de emigración, esta vez con una marcada orientación hacia el exterior.

Lo común de esos tres momentos no fue solo la salida de contingentes de población de las tierras que iban a ser ocupadas por nuevos cultivos, sino que la modernización productiva no tuvo como contrapartida la modernización institucional ni una apertura de las relaciones sociales de producción en el campo. Esa contradicción ha implicado desarraigo, tanto social como territorial, de colectivos sociales.

Las actividades productivas han repercutido, en los diversos momentos, sobre tejidos comunitarios e instituciones ancestrales, obligando al repliegue de comunidades originarias hacia territorios de frontera agrícola o a las ciudades; también ha contribuido a la desaparición de instituciones endógenas y ruptura de tejidos comunitarios. Por otra parte, la formación de nuevas instituciones, a partir de los trazos de la modernización económica, también ha sido cercenada. Los intentos de modernización económica, paradójicamente, lejos de propiciar la modernización en otros campos, no acarrearón los impulsos suficientes para erradicar relaciones de producción que en muchas circunstancias han sido pre-capitalistas, muy desiguales y antidemocráticas. Esa escasa innovación institucional, de acuerdo con Wheelock (1997), no aportó los incentivos necesarios para promover una estructura económica sostenible en el largo plazo. La ausencia de innovaciones institucionales explicaría la falta de incentivos individuales y colectivos para traducir las energías sociales en una mayor productividad de las actividades

económicas. Al mantenerse deprimidas esas energías, también se ha reprimido en cierto modo el desarrollo social, así como la creación de instituciones sociales modernas y la integración de la nación, tanto desde el punto de vista territorial, como económico e institucional. Conforme avanzó la acumulación primaria sobre tierras y población desarraigada, las comunidades indígenas y el campesinado libraron sus propias guerras de resistencia en contra de la expropiación y de la imposición del trabajo forzoso en las plantaciones de café; no obstante, allí se cortaron muchos tejidos comunitarios, pero además se afectó la sostenibilidad de esas actividades productivas por la expulsión de poblaciones que luego se habrían de requerir como fuerza de trabajo (Gould, 1994).

Otro factor que afectó la sostenibilidad de la economía nicaragüense fue su tardía incorporación al mercado mundial, en comparación con sus vecinos (Groot y Clemens: 1989)²⁰. Cuando esa inserción fue más dinámica, a mediados del siglo XX, su dependencia del café y la producción de carne de res se hizo a expensas de un profundo deterioro ecológico, mientras que se propició “la pérdida de tierras y nuevas formas de subordinación de los pequeños productores” (Groot y Clemens, p. 96)²¹.

20 Mientras que a mediados del siglo XIX el cultivo y exportación de café ya estaban en su apogeo en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, en 1880 la siembra apenas comenzaba a expandirse en Nicaragua.

21 En efecto, la expansión del café en Nicaragua “no promovió dentro del sector ni el desarrollo del capitalismo ni la democratización de las relaciones sociales que regían el uso de la tierra y el trabajo” (Dore, 1994, p. 432). Esa misma autora explica que con el café se practicó el despojo de tierras a los propietarios más pobres, se propició la concentración de la propiedad y, además, se establecieron sistemas de trabajo forzado y el endeudamiento. Mientras tanto, la expansión de la actividad algodonera “quebró el patrón histórico de desarrollo. Absorbió mano de obra, cada vez más temporal, restringiendo las tierras de labranza para la agricultura de subsistencia que cumplía una función complementaria para los asalariados agrícolas temporales. En esa forma, la actividad algodonera marcó la penetración plena del capitalismo en la economía rural, específicamente por la proletarianización de la fuerza de trabajo” (Thielen, 1989, p. 117).

El desarrollo de la caficultura, junto a la producción y agroindustrialización de la caña, del algodón y la ganadería, generaron una modernización productiva, que posteriormente se amplió con el desarrollo de la industria manufacturera ligada al régimen de industrias de integración. En razón de esa dinámica, la economía nicaragüense creció a un ritmo del 5,2% como promedio anual durante la década de 1950-60, mientras que en el decenio siguiente alcanzó un crecimiento anual promedio del 7,1% (el más alto de la región durante ese periodo). En los setenta, se mantuvieron las condiciones macroeconómicas internas para continuar el crecimiento de la economía, pero intervinieron dos factores que frenaron ese desarrollo a partir de la segunda mitad de la década: la crisis mundial de los hidrocarburos y la coyuntura político revolucionaria, entre 1977 y 1979, que produjo la caída de la dictadura somocista. Un tercer factor perturbante de ese desarrollo habría sido el terremoto de 1972.

En la actividad del café, la participación de los pequeños y medianos productores creció de manera significativa después de 1950. La zona territorial de influencia de la mediana producción de café fue la región central norte, mientras que la gran producción continuó concentrada en el Pacífico. No obstante, esa diferenciación territorial en el carácter social de los productores, también se vinculaba a otras diferencias relativas al poder político de unos y otros, lo que permitió a los grandes productores disponer de mayores ventajas para la obtención de crédito, para asegurarse las cantidades de mano de obra necesaria y, también, controlar las fases de cultivo, las actividades de financiamiento, agroindustrialización y comercialización; lo mismo que el traslado de inversiones a la producción de algodón.

Si bien se ha presenciado un acelerado y expansivo crecimiento productivo en diversos rubros, las relaciones de producción en el campo no experimentaron alteraciones que permitieran una mejor distribución del producto social. Después de 1950, la diversificación productiva indujo una diversificación de los actores involucrados en el desarrollo, lo que alteró, en cierta medida, el esquema de relaciones sustentado en las tradicionales estructuras agrarias de control y subordinación política, y que giraban en torno a la figura patriarcal. Nuevas elites económicas se establecieron y se expandieron²², lo mismo que nuevos grupos de pequeños y medianos productores²³, junto con otros segmentos de la clase obrera y trabajadores asalariados, se conformaron junto a otros sectores de una emergente clase medio y comercial.

Estructura productiva, sujetos sociales y emigración

Los movimientos poblacionales en Nicaragua se han configurado en función de los procesos productivos y sociopolíticos. En realidad, ese no es un rasgo exclusivo de la sociedad

22 A mediados de los años setenta, Jaime Wheelock, en su obra *Imperialismo y Dictadura* (1979), identificaba tres grandes polos de poder económico: uno agrupado en torno al Banco Nicaragüense (BANIC) que fusionaba capitales ligados a la agroexportación, principalmente de los algodoneros, también con fuertes vínculos con el Chase Manhattan Bank; otro grupo de operaciones en torno al BANAMÉRICA (Banco de América), fusionaba los capitales de la oligarquía ganadera y comercial, los productores de azúcar y bebidas (burguesía granadina); la familia Somoza que con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos se instaura en el poder desde 1937 y desarrolla un proceso de apropiación voraz a partir del control de los aparatos del Estado y otros mecanismos de competencia desleal con el resto de la burguesía local.

23 Esa temática ha sido tratada de forma mucho más amplia por varios especialistas en el desarrollo del agro nicaragüense, como Baumeisster y Neira (1986), Kaimowitz (1986).

nicaragüense; no obstante, en ese país se presenta un desacoplamiento entre la dinámica del desarrollo y la evolución sociopolítica del país.

Los obstáculos para la inserción de los agentes productivos y para la integración de la población en el desarrollo social, desencadenan condiciones para un desarraigo estructural y desembocan, después, en la salida forzosa de contingentes de población de sus lugares de residencia.

Desde el momento en que la producción capitalista comenzó a gravitar en torno a las grandes unidades ganaderas y cafetaleras, ese modelo productivo se apartó de las condiciones históricas de vastos colectivos de indígenas y campesinos tradicionales, dedicados a la producción de alimentos, granos básicos, bajo formas propias de la agricultura de subsistencia y, en numerosos casos, bajo sistemas de propiedad comunal de la tierra. De esa contradicción emergió un sistema económico dual con rasgos más marcados que en el resto de la región.

En la agroexportación coexistieron las haciendas tradicionales y semif feudales con las explotaciones capitalistas y empresas modernas para la exportación. De la conformación de esos grupos se ha nutrido el sistema de poder en el país. Su base económica, constituida en parte por la producción exportable, también se ha organizado en torno a diversos consorcios mixtos, con articulaciones intersectoriales, intereses conexos y también agudas contradicciones que han intervenido en el curso de los acontecimientos sociopolíticos del país. Desde 1950 a la fecha, las diversas transformaciones estructurales acontecidas, junto con las transformaciones sociopolíticas, contribuyeron a variadas reconfiguraciones de las elites económicas.

Ese desarrollo económico estuvo orientado a generar procesos de acumulación en los departamentos del Centro y el Pacífico del país; mientras que en el Caribe continuó desarrollándose una economía de enclave que coexistía con las pequeñas unidades de subsistencia. En ese contexto se acentuaron las brechas territoriales entre las regiones del Caribe y el resto del país.

Durante la administración sandinista, grupos del empresariado nicaragüense fueron afectados por diversas medidas adoptadas por el gobierno revolucionario. Algunas grandes extensiones de fincas en manos del somocismo fueron expropiadas, y otras tantas también intervenidas cuando sus propietarios entraron en contradicción con el régimen y abandonaron el país. Tanto la administración sandinista como los dos gobiernos subsiguientes, mantuvieron una política de apoyo a la producción de agroexportación, lo que facilitó la concentración de incentivos crediticios y otras facilidades fiscales en favor de las grandes explotaciones. Sin embargo, las políticas de estímulo a la agroexportación no se tradujeron en su dinamización productiva, ni en una verdadera modernización económica e institucional.²⁴ A los problemas derivados de los conflictos políticos, se agregaron los efectos de fenómenos climáticos y un prolongado conflicto en torno al tema de la propiedad sobre la tierra.

Las actividades agroindustriales y la manufacturera influyeron en la diseminación de nuevos grupos de burguesía y en la dispersión del universo laboral que había cumplido una doble

24 Se señala al respecto que durante la administración sandinista las unidades controladas por el Estado no fueron capaces de aprovechar esos elevados incentivos, tanto por ineficiencia como por debilidades administrativas; mientras tanto, la gran burguesía agraria, pese a los excesivos privilegios crediticios, por razones políticas, no asumió la función dinámica que le había asignado el gobierno en el desarrollo del sector agroexportador (de Groot y Clements, 1989, p. 99).

función: el suministro de mano de obra, con un marcado acento estacional, para las actividades de cosecha y actividades permanentes y, luego, el abastecimiento de alimentos, esencialmente de granos básicos y hortalizas, para solventar la demanda de tales productos en el mercado local. Bajo la primera modalidad se instituyó la figura del proletariado y semiproletariado y, tras la segunda, se distingue la figura del productor agrícola de subsistencia, que también ofrecía su fuerza de trabajo en las haciendas.

Vilas (1987), al analizar la temporalidad y la precariedad del empleo rural, señalaba la existencia en Nicaragua de un “proletariado desigualmente desarrollado, con una gran inestabilidad ocupacional y un proceso no concluido de separación respecto de los medios de producción y de un fundo familiar de reproducción” (p. 96 y ss). Con diferencias conceptuales respecto de otros autores y otras autoras, reconocía que un rasgo importante de la fuerza de trabajo proletarizada se originaba en la temporalidad de la demanda de fuerza de trabajo. Dicha condición era el resultado de un movimiento cíclico de las actividades de cosecha y del nivel general de la actividad agropecuaria, por lo cual ese grupo se veía forzado a buscar otras ocupaciones o a soportar periodos más o menos largos de desempleo. Entre ese tipo de trabajadores y el de los productores de subsistencia y campesinos aparceros se mantiene, en algunos ámbitos, una enorme zona gris.

Esa observación refuerza el supuesto sobre la composición de un universo laboral en función del empleo cíclico y una desigual distribución territorial de la demanda. Esa particularidad explica, en parte, que la emigración tanto interna como hacia el exterior se haya constituido en un rasgo importante del mercado laboral y del comportamiento de la población trabajadora.

También Vilas establece una tipología de este tipo de trabajadores, entre los cuales ubica: a. el *proletariado itinerante*, cuya condición se expresa y especifica a partir de una continua movilidad entre ocupaciones y sectores de la economía;²⁵ b. el *semiproletariado*, compuesto por campesinos pobres, minifundistas, para quienes el producto de la finca, ya sea propia, en arriendo o bajo el sistema de aparcería, es insuficiente para resolver sus necesidades de subsistencia y las de su familia, en consecuencia también se empleaban temporalmente en las fincas de otros productores medianos o grandes.

Otros estudios señalaban que en la estructura productiva se mantenían una serie de particularidades: primero, gira en torno a unos pocos cultivos; segundo, con muy poco valor agregado local, y tercero, desligada de entramados socioproductivos más amplios y más densos. Esos rasgos han estado presentes en la leve recuperación económica experimentada a partir de mediados de los noventa. Las condiciones de esa estructura afectan la estabilidad de las actividades generadoras de empleo, el nivel de productividad y las posibilidades para mejorar ingresos. Entonces, esas condiciones continúan propiciando, a fin de cuentas, el lanzamiento de la población laboral dentro de circuitos migratorios que han estado en función del calendario de cosechas y de la disposición territorial de las oportunidades de empleo. Al haberse agotado prácticamente las posibilidades laborales en las actividades de frontera, se produce el desplazamiento de fuerza

25 Una vez finalizada la temporada de máximo empleo agrícola en el café y el algodón, los trabajadores se trasladaban a los servicios urbanos, la construcción, la ganadería, y la agricultura para el mercado interno y producción de subsistencia. No es de extrañar que ese grupo también se desempeñara en actividades propias del sector informal urbano.

laboral a los territorios vecinos, principalmente a Costa Rica, mientras que una franja importante de población se aventura dentro de los circuitos de la emigración hacia el Norte: México y Estados Unidos. También se pone en evidencia que en la ruta de la transmigración algunos conjuntos de población nicaragüenses se han ubicado temporal, y algunos casos casi de manera permanente, en Guatemala y en Belice.²⁶

Otro rasgo de la composición social del agro nicaragüense es la coexistencia, al lado de la burguesía agroexportadora, de un amplio sector de pequeños y medianos productores que son la principal fuente para el aprovisionamiento de alimentos, en especial de granos básicos, y que contribuyen con una parte muy significativa de la producción de exportación, principalmente en café, ganado y tabaco; en el pasado también en la producción del algodón.

Pese a su elocuente aporte, ese sector ha gozado de muy pocas ventajas frente a las elites que han controlado el reparto de beneficios desde el sistema político. Ese fenómeno parece ser permanente en la historia económica del país, sin que la variable ideológica del régimen haya introducido cambios en ese tipo de asimetrías estructurales.²⁷

Esas unidades recurren a la utilización de fuerza de trabajo asalariada, o según diversos sistemas de contratación no salariales

26 En estos dos países hay una visible presencia de inmigrantes nicaragüenses en actividades agrícolas, pero es mucho más notoria su presencia en oficios relacionados con la informalidad urbana, por ejemplo, las ventas callejeras de comidas y otros artículos variados.

27 Por ejemplo, se ha argumentado que durante el gobierno sandinista, pese a que las fincas familiares y las unidades de mediana producción necesitaban menos incentivos para producir, recibieron menos recursos y asistencia estatal que las empresas estatales y que las grandes haciendas capitalistas, inclusive fueron objeto de una serie de políticas erradas que repercutieron sobre la forma de vida y modalidad de producción del campesino (Nuñez *et. al.*, 1995).

y de intercambio de fuerza de trabajo. No obstante, sus propietarios participan directamente en las labores de campo, como una forma de maximizar las utilidades y manejar las diferencias de precio y costos de producción. Conforme disminuye el tamaño de la finca, se vuelve más importante la participación directa del propietario y la utilización de la fuerza de trabajo familiar, tanto de los hijos varones como de las mujeres. La producción de la finca constituye una actividad muy importante para la obtención de medios de subsistencia para el conjunto de la unidad familiar. Por eso, cuando merma la capacidad de la finca para albergar las energías productivas de la familia, se produce la salida obligada del “excedente” de mano de obra familiar hacia otras actividades, que, si no son proporcionadas por el entorno geográfico inmediato, se asocian a las emigraciones.

La plataforma urbana de la emigración

Otro ámbito del cual emergen dinámicas propicias para la salida de fuerza de trabajo hacia otros contextos es el universo urbano. Después de haber ejercido, durante las décadas del cincuenta al noventa, una intensiva atracción de población desde las áreas rurales sofocadas por el desarraigo productivo y la violencia armada, los espacios urbanos han sido saturados por un crecimiento poblacional supernumerario, por encima de las capacidades de las actividades productivas de la ciudad para garantizar, en similar proporción, las fuentes de vida indispensables para el mantenimiento de esas crecientes masas de habitantes.

A partir de los años sesenta, en Nicaragua se experimentó un desarrollo del sector industrial que fue favorecido por el régimen de industrias de integración en el ámbito regional. Ese desarrollo permitió la diversificación de mercados y de las exportaciones, pues mientras que entre 1960-64 la producción industrial representaba el 21,2% del valor de las exportaciones, entre 1975-77 alcanzó el 46,7%.

Pero si la modernización agrícola en Nicaragua no propició las condiciones para asegurar una inserción equilibrada de la PEA rural en los diversos ámbitos de la producción, el desarrollo industrial tampoco suplió mecanismos para solventar ese tipo de deficiencias en otros ámbitos, por el contrario las reprodujo y las amplió.

En el contexto de un desarrollo industrial a escala regional, Nicaragua había alcanzado un importante dinamismo con la instalación de algunas plantas de producción en el ramo de la fabricación de aceite, soda cáustica, insecticidas y resinas (Guerra-Borges, 1994). Pero a pesar de su rápido desarrollo en los sesenta y setenta, la planta industrial nicaragüense ya evidenciaba, a finales de ese periodo, un pronunciado estancamiento y señales de agotamiento de sus posibilidades de expansión. Esa situación se vio agravada por fenómenos externos asociados a la crisis mundial de los hidrocarburos y por el sesgo dependentista del modelo en cuanto a la importación de bienes de capital e insumos. El desarrollo industrial se había nutrido de una favorable situación externa, creada por una creciente demanda de productos primarios producidos por Nicaragua, entre ellos el algodón, la caña de azúcar, la carne y el café; también durante las administraciones somocistas el gobierno había tenido acceso a

préstamos concesionales. Sin embargo, esas condiciones se agotaron como resultado del *shock* petrolero, el deterioro de los términos de intercambio y las repercusiones del terremoto de 1972.

El agotamiento de la producción en el sector manufacturero, al tiempo que se producía una crisis de la agroexportación, repercutió directamente sobre la capacidad de la industria para contribuir a la generación de puestos de trabajo en el sector formal. La PEA industrial, que había sido en 1963 el equivalente al 11,6% del total, había subido en menos de un punto por ciento en 1972 y se contrajo al 9,6% en 1975; posiblemente esa reducción estuvo relacionada con el impacto del terremoto. También después de 1972, debido al terremoto, se había producido una reducción en el crecimiento poblacional de Managua. Pero cuando el ritmo poblacional urbano volvió a retomar su dinámica y reapareció la inmigración desde el campo, se volvió a generar una fuerte presión sobre la oferta de empleos en la industria. Ante el agotamiento de las fuentes de empleo en la zona agrícola y en el sector formal urbano, el sector terciario, conformado por el comercio y los servicios en el empleo público y el privado, se constituyó en el refugio de los inmigrantes internos y las nuevas generaciones laborales que ingresaban en el mercado laboral.

El despliegue de otras actividades propias de la economía urbana generó una mayor participación de la población económicamente activa urbana dentro de la PEA global, pero desde sectores distintos al de las industrias de integración.²⁸ Como en el resto de Centroamérica, en los principales centros metropolitanos de cada uno de los respectivos países se desarrollaron

28 Ese fenómeno, según Vilas, significaba que la PEA urbana se concentraba en lo que él consideraba, de acuerdo con una apreciación un tanto rígida, "sectores no productivos".

nichos para una abundante absorción de fuerza de trabajo. En lo relativo al desarrollo de la PEA, durante la década de los setenta, de acuerdo con datos referidos a los periodos intercensales, Managua absorbía poco menos de un cuarto del total de la fuerza laboral del país (22,5%); por debajo de la ciudad de San José de Costa Rica, en el conjunto regional; no obstante, Managua constituía en los setenta la principal aglomeración, con el 47%, de la PEA urbana de todo el país.

Entre 1950 y 1971, la población de Managua se había triplicado; y creció más del doble en las dos décadas y media posteriores. Como puede apreciarse en el cuadro 2, durante los diversos periodos intercensales a partir de 1950, el nivel de urbanización de la estructura demográfica fue mucho más acelerado, lo que evidenciaba, por otra parte, la pérdida de importancia relativa de las zonas rurales, como resultado de una merma tanto en la densidad demográfica como de la atracción poblacional desde otras zonas.

Cuadro 2
Tasas de crecimiento de la población
(1950-1995)

Periodos intercensales	Urbana	Rural	Total
1950-1963	4,1	2,2	3,1
1963-1971	4,5	2,7	3,0
1973-1995	4,1	2,4	3,2

Fuente: Censos Nacionales de Población e INEC.

Pese a que la población de las demás capitales departamentales y otras ciudades había crecido más rápidamente durante las últimas dos décadas, Managua, con aproximadamente un millón de habitantes, todavía concentraba en torno al 60% de toda la población que habitaba los diez municipios urbanos más importantes del país. Quizás con excepción de los años inmediatamente posteriores al terremoto de 1972, esa tendencia se había mantenido invariable.

Cuadro 3
Evolución de la población de los diez principales
centros urbanos entre 1950-1995
(en miles de personas)

Zonas urbanas municipales	Tasa de crecimiento (1950-1971)		Tasa de crecimiento (1971-1995)		
	1950	1971		1995	
Managua	109,4	384,6	6,2	864,2	3,4
León	30,5	54,8	2,8	123,9	3,4
Granada	21,0	35,4	2,5	71,8	3,0
Masaya	16,7	30,8	2,9	88,9	4,5
Chinandega	13,1	29,9	4,0	97,4	5,0
Diriamba	7,6	10,2	1,4	30,6	4,6
Matagalpa	10,3	20,7	3,3	59,4	4,5
Estelí	5,6	19,8	6,2	71,6	5,5
Jinotega	8,0	14,4	2,8	33,7	3,6
Bluefields	4,0	10,2	4,5	30,8	4,7
Total	226,2	610,8	4,8	1472,3	3,7

Fuente: Censos nacionales (Tomado de INEC, 1997).

Entre otros detonantes del desplazamiento poblacional se visualizan, precisamente, las características de las actividades económicas de ese universo urbano. Entre ellas, las más importantes, se constituyeron en torno a las actividades informales. En efecto, en los diversos universos urbanos se propagó un pujante sector de la llamada informalidad que atrajo, de manera acelerada, a los contingentes laborales que no se lograban insertar en otros ámbitos formales constituidos por el sector industrial formal y por el sector público.

Los análisis sobre el tema de Chamorro, Chávez y Membreño (1991) remiten a una serie de condiciones que se percibían desde principios de los años setenta como factores coadyuvantes al fuerte despliegue del SIU en la economía nicaragüense. Aparte de la fuerte emigración rural-urbana, la disminución de posibilidades para insertarse en el mercado laboral tradicional y las repercusiones sociales y económicas del terremoto de 1972, obligaron a los habitantes de la ciudad de Managua, primero, y, posteriormente, a los de otras ciudades, a desarrollar diversas estrategias para asegurar tanto la supervivencia como el desarrollo productivo. Un importante sector de la población damnificada por el terremoto había abandonado la capital hacia otros ámbitos de la periferia urbana, constituida por otras ciudades del Pacífico.

Después de la derrota del somocismo, debido a razones políticas, también se produjo una salida considerable de población, en aquel entonces, fuera del país. Esa fue, según diversos autores, una de las razones de un crecimiento poblacional menos dinámico de Managua, entre 1971 y 1995, frente al de otras ciudades del país; no obstante, en términos absolutos, esa ciudad

continuó concentrando el mayor volumen de población entre todas las ciudades. Las contradictorias políticas de contención de las emigraciones rurales, aplicadas por el sandinismo, no pudieron detener el crecimiento poblacional de la capital. Las actividades del sector informal mostraban, a mediados de la década de los ochentas, un crecimiento más dinámico que el del resto de los sectores productivos.

Durante la década revolucionaria, la estructura del empleo se articuló en torno a tres sectores: a) el sector público, b) el sector informal, y c) el sector formal de la economía.²⁹ De los tres sectores, el último manifestó durante la década de los ochenta las repercusiones de la recesión sobre el empleo. En la agricultura se generaba alrededor del 30% del empleo del total de la PEA, mientras que la industria manufacturera se mantuvo en niveles inferiores al 10% (Vargas, 1993). El sector productivo formal se caracterizó por una estructura de empleo con poco dinamismo y un carácter estacional. Fueron las actividades del sector terciario, junto con el empleo en el sector público, las que incorporaron más mano de obra. El empleo en el sector informal tuvo repercusiones muy claras sobre la dinámica de empleo cuando se produjeron los ajustes macroeconómicos de la década siguiente de finales de los ochenta y los noventa.

Las referencias sobre la evolución del SIU en Managua, debido a diferentes criterios utilizados para su definición y medición, varían según las fuentes; no obstante, a pesar de las

29 Entre los razonamientos que ayudan a entender las causas inmediatas del desencadenamiento de la emigración transfronteriza, vale la pena prestar atención también a observaciones relativas a manera en que la composición del mercado laboral y la estructura del empleo, inciden desde finales de los ochenta en la salida de población laboral fuera del país (Funkhouser y Pérez-Sáinz, 1998).

diferencias, en todos los análisis queda manifiesto el acelerado crecimiento que experimentó ese sector entre 1970 y las décadas siguientes. Según resultados del Censo Económico Urbano del Banco Central de Nicaragua, en 1996 el 64% de total de empresas que proporcionaban empleo urbano eran empresas unipersonales (funcionaban con solo un trabajador); el 32% entre 2 y 5 trabajadores, y solo el 4% restante ocupaban a cinco o más trabajadores (PNUD, 2000)

Cuadro 4
Magnitud del Sector Informal dentro de la
Población Económicamente Activa

	1970	1982	1985	1992	1993	1999
PEA global (miles)	579	798	958	1,160	1,401	1.728
PEA Urbana	272	437	562	721	917	—
SI (% de la PEA)	43,6	50,4	52,0	64,5	70,0	71,0

Fuente: Banco Mundial (1995); PREALC (1986); FLACSO/IICA (1991).

Las características del empleo informal en Managua y la contracción de otras formas de empleo, se reprodujeron con variantes en los demás centros urbanos del país; en ellos, la informalidad urbana también se insertaba de forma dinámica como principal campo de atracción de la población económicamente activa. Según Rocha y Terán (1998), con base en datos de dos encuestas oficiales, el conjunto del sector informal en 1993 correspondía al 37% de la PEA global, frente a un 31% en 1985. Dentro del conjunto de sectores laborales, el informal mostró la tasa de crecimiento anual más alta (1,9%), en un contexto de contracción en todos los demás sectores, con excepción del

agrícola de subsistencia, donde se había refugiado la fuerza laboral campesina. En numerosas circunstancias se mantuvo un desplazamiento de población desde cualquiera de esos dos sectores hacia el otro, como parte de una serie de estrategias combinadas de supervivencia de la población más pobre.

Según otras evidencias, el sector informal había llegado a sus límites de expansión durante la primera parte de la década de los noventa. En Managua reclutaba a más de dos tercios de la población ocupada, y en el resto del país a la mitad. Si bien dentro un importante sector encontraba posibilidades de mejora del ingreso, por efecto de la presión del desempleo y la ausencia de mecanismos de compensación ante la pérdida de ingresos, ese sector se mantuvo como ámbito y refugio de actividades casi exclusivamente de subsistencia (Chamorro, Chávez y Membreño, 1991). Pese a su importancia para la generación de empleos, su crecimiento en la segunda parte de los noventa se vio frenado; pero también el nivel de remuneraciones cayó de forma drástica durante la década. La vulnerabilidad laboral del grupo de población que se inserta en el sector informal se manifiesta en la amplitud del desempleo, pues de poco más de un millón de personas que laboraban en el sector en 1999, unas 950.000 estaban subempleadas.³⁰ Esa situación tiene repercusiones diferenciadas de acuerdo con condición de género y lugar de residencia, y en esa medida son las mujeres y los habitantes de zonas rurales quienes experimentan en mayor magnitud las desventajas del empleo y el deterioro de los ingresos. El

30 Así señalado en PNUD, 2000, p. 78. Dicha estimación incluye tanto a la PEA que laboral en el sector informal urbano, como en empleos informales de la zona rural.

salario nominal de las mujeres empleadas en el sector informal tuvo una caída equivalente al 17% entre 1992 y 1999, mientras que los salarios de los varones se mantuvieron constantes.

Por lo que respecta al empleo en el sector público, luego de que este había registrado un incremento de más de 15.000 puestos de trabajo entre 1980 y 1985, a partir de ese último año padeció los efectos de los ajustes en la política de empleo del Estado sandinista y de las políticas de “compactación” de instituciones estatales que originó el desplazamiento de casi 10.000 trabajadores entre ese año y las elecciones de febrero de 1990. Después de 1990 se produjeron otros ajustes en las políticas de empleo público que fueron el resultado de las acciones de contrarreforma estatal impulsadas por la Administración de Violeta Barrios, vencedora en las elecciones de ese año. A ese conglomerado de mano de obra desplazada se sumaron también, después de abril, miles de hombres y mujeres que procedían de las filas de los grupos desalzados de la Resistencia Nicaragüense y muchos más de las filas del Ejército, así como de los cuerpos de seguridad al gobierno sandinista.

El Ejército Popular Sandinista que en enero de 1990 contaba con 86.810 miembros, pasó a disponer 14.084 en 1996 (Cajina, 1996). Eso significó una reducción de 77.257 plazas ocupadas por soldados en el Estado. Aunque cada uno de los militares pasados a retiro recibió una compensación económica, esa resultaba insuficiente para que la gran mayoría le hiciera frente a las necesidades de subsistencia familiar en espera de insertarse en actividades civiles. Tal situación, en el contexto de la recesión productiva y de las secuelas de la guerra, agregó una serie de nuevas tensiones a una sociedad que experimentaba

después de las elecciones de 1990 una reversión dramática de las expectativas despertadas por el cambio de gobierno y la finalización del conflicto armado. Los recortes no solo no significaron ningún ahorro fiscal, sino que provocaron una serie de conflictos que se unieron, por un lado, a los problemas derivados de la recesión y la pobreza y, por otro, a las tensiones políticas de la coyuntura de transición posrevolucionaria. En similar situación o, a veces, en condición de desventaja, unos 22.400 desmovilizados de las filas de Resistencia Nicaragüense se incorporaron al ejército de desempleados.

En síntesis, el transfondo de la emigración está vinculado a la persistencia de una recesión productiva agravada, primero, por la guerra y los remanentes posteriores de violencia. Segundo, el empleo en las actividades formales de la agricultura y la industria no solo dejó de crecer, sino que se manifestó de signo negativo. Algunas de tales características ya han sido expuestas en este mismo trabajo, pero en la década de los ochenta esa situación adquirió ciertas peculiaridades en vista de los estragos económicos del bloqueo económico de los Estados Unidos, así como de la agresión militar, de la resistencia armada local y de la propia estrategia de defensa sandinista, sobre la dinámica productiva y la infraestructura económica del país.

Entre las decisiones adoptadas por el régimen sandinista en materia de desarrollo económico, se había puesto énfasis en una estrategia de incentivos hacia el sector formal que, contradictoriamente con el carácter de clase de la revolución sandinista, beneficiaba más a los grandes productores terratenientes que a los pequeños y medianos campesinos. Aun a costa del precio político de ese esfuerzo, el gobierno sandinista no logró

entusiasmar a los grandes empresarios con los estímulos ofrecidos para reactivar la producción.

Según un autor ligado a la oposición antisandinista, “muchos empresarios, incluidos los pequeños y medianos comerciantes y agricultores, pensaban que la política de alianzas táctica de clases bajo la hegemonía de los obreros y campesinos, estaba exigiendo que la tan desprestigiada burguesía colaborara feliz en la construcción de su propio patíbulo” (Taboada, 1994). Otros autores han aportado evidencias sobre la aplicación de medidas, consideradas hostiles en contra de las actividades del sector informal urbano, por parte del sandinismo, hasta tal punto que las organizaciones que ejercían el control político en las barriadas incluyeron, dentro de sus tareas, la denuncia de personas dedicadas al comercio informal por “fomentar la especulación”. Otras medidas de coacción, también impuestas por el sandinismo, afectaron la producción rural campesina. Especialmente, una rígida política de mercadeo agrícola y controles de precios, fueron percibidos por los productores rurales como mecanismos de control estatal sobre la cultura del campesinado, los que en muchos casos actuaron como desestimulantes de la iniciativa productiva en ese sector.

En segundo lugar, Nicaragua no fue ajeno a la introyección de severos ajustes económicos que afectaron la principal estructura de generación del empleo, que descansaba en el sector público; después de la derrota sandinista en 1990, la reducción del tamaño y la reconfiguración de la acción del Estado se mantuvo y aceleró y, en vista de ello, también se avanzó más en la reducción del número de puestos de trabajo en ese sector. En tercer lugar, la movilización de fuerza de trabajo desde el Estado

provocó un masivo desplazamiento de esa mano de obra hacia el sector informal, el que ya para entonces había encontrado límites para continuar con las expansiones manifestadas durante las dos décadas precedentes. Después de 1990, el mecanismo mediante el cual las empresas hicieron frente a la situación de estancamiento recesivo, y a las repercusiones del ajuste, fue la reducción de las planillas del personal, y agravaron, con ello, la situación de desempleo preexistente y profundizada, también, por los recortes de planilla en el Estado (Vargas, 1993).

En cuarto lugar, al quedar constreñidas las posibilidades de engrosar las filas del sector informal, así como por las dificultades para acceder a tierras de frontera agrícola, un importante conglomerado de individuos se sintió forzado a buscar opciones de empleo y supervivencia en otros entornos geográficos.

Sin duda, los factores desencadenantes de la marcha de nicaragüenses hacia el exterior se fraguaron desde la década de los ochenta, pero persistía un trasfondo de deficiencias que profundizaron primero la guerra y los conflictos políticos, y posteriormente los programas de ajuste estructural y otras medidas de contrarreforma que han afectado las posibilidades de producción y de empleo de forma más amplia.

Dinámica sociopolítica y emigración en los noventa

Los factores precipitantes de la emigración laboral más reciente, quizás no podrían entenderse si no se considera la dinámica sociopolítica en su dimensión territorial durante la posguerra nicaragüense. Después de un prolongado periodo de luchas

armadas, Nicaragua llegó en los años noventa a constituir uno de los escenarios para la refundación de una etapa de desarrollo pacífico y democrático, con la esperanza de que esa condición alentara también la recuperación productiva y el bienestar social. En condiciones muy difíciles y obstáculos derivados de un sinnúmero de factores internos e internacionales, después del cambio de gobierno de 1990 se fue poniendo fin a la guerra, y las secuelas del conflicto armado se aplacaron de modo relativo durante los meses siguientes.³¹ Pero la esperanza de un mejoramiento de la situación económica que le permitiera a la población superar las difíciles condiciones de vida, quedó postergada por más de una década.

La interrelación entre finalización del conflicto armado y situación económica de Nicaragua tenía importancia por dos razones: **a.** para asegurar el retiro de las acciones armadas por parte de la población combatiente y, **b.** proporcionar algún medio de inserción de dicha población a las actividades productivas. Esos factores ponían en evidencia, como lo habíamos sustentado en un análisis previo (Morales, *op. cit.*), la indivisibilidad de las diversas esferas del proceso de paz nicaragüense. Es decir, eran imprescindibles una serie de medidas políticas y militares para garantizar el cese de las acciones armadas, pero tales acciones deberían complementarse con un conjunto de programas productivos y medidas sociales compensatorias que aseguraran la viabilidad económica del proceso de paz.

31 El Gobierno antisandinista firmó una serie de acuerdos con la dirigencia de la Resistencia Nicaragüense, mediante los cuales procuraba hacer efectiva la desmovilización y desarme de los irregulares. Sin embargo, una serie de obstáculos impidieron que dicho acto se ejecutara de conformidad con tales acuerdos; el citado tema fue objeto de un trabajo anterior, por eso no se profundiza en dichos aspectos. Véase al respecto: Morales (1995) y Lara y Herrera (1996).

El cuanto al primer aspecto, la sociedad nicaragüense cumplió con una serie de compromisos asumidos por las partes en conflicto que hicieron posible el desarme y desmovilización de los irregulares. También, como parte de dichos acuerdos, las fuerzas armadas nicaragüenses fueron reducidas drásticamente. De acuerdo con las cifras proporcionadas por los organismos encargados del desarme y desmovilización de las fuerzas insurgentes, en noviembre de 1990 unos 22.413 excombatientes habían entregado sus armas. Se trataba, en una gran mayoría, de jefes de familia que, junto con sus parientes, formaban un contingente de 81.134 nicaragüenses que demandan diversos tipos de asistencia, pero principalmente medios de trabajo para asegurar el sustento de toda la familia. La imposibilidad de ver satisfecha esa condición fue, en la mayoría de los casos, el factor que precipitó el retorno de un conjunto de tensiones armadas que cortaron, en medio de otra serie de dificultades propias de la transición política, el ambiente de paz al que aspiraban los nicaragüenses.

Aunque la dinámica más intensa de la guerra había disminuido con el desarme, nuevas derivaciones de lucha armada se emplazaron en los antiguos escenarios del conflicto; principalmente en una amplia franja comprendida desde Las Segovias, atravesando por la Región Central, hasta la región de Zelaya y río San Juan, en la frontera con Costa Rica. Tales acontecimientos se transformaron en una serie de amenazas a la seguridad personal, así como una creciente falta de garantías para la movilización tanto de excombatientes como de exsoldados. La falta de seguridad originó a su vez un nuevo fenómeno de desplazamientos humanos, desde muchos sitios en los territorios antes señalados, que habían funcionado como el antiguo escenario de la guerra.

De acuerdo con cifras de la misión de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la OEA, en la “frontera del conflicto” se movían unos 500 hombres en armas, formados en pequeñas bandas, y que eran los responsables de una serie de hechos de violencia. Inclusive, señalaba un informe de la OEA, “lo que resulta más grave (era que dichos grupos) se autoperciben como autoridades legítimas en las zonas de conflicto” (CIAV/OEA, 1996, p. 2).

Pero si la desactivación de los dispositivos militares insurgentes tenía dificultades, la inserción productiva de los excombatientes tropezaba con otra cantidad de impedimentos originados en los niveles crecientes de desempleo que ya producían un desasosiego social entre vastos sectores de la población.

El principal problema al que se enfrentó Nicaragua tras los arreglos entre las fuerzas en disputa para poner fin a la guerra, fue asegurar algún medio de subsistencia a una población que rondaba los 100 mil casos, que se habían desplazado del ejército o de la RN, y que, como se ha señalado antes, eran en su mayoría jefes de familia. A ese grupo debe sumarse, además, el universo más amplio de población afectada por la guerra que comprendía además de los excombatientes, a los repatriados, los desplazados internos, los lisiados y otros damnificados por los enfrentamientos, cuya suma fue estimada en más de medio millón de personas (CIAV, 1995). La disposición de recursos, así como la elaboración de planes y acciones para resolver la situación de posconflicto, en la mayoría de los casos, no avanzó en el intento de dotar de medios de producción, recursos y empleo para esa población.

Esos obstáculos con que se topó la sociedad nicaragüense para la consumación de la paz, no se originaban únicamente en una desmedrada voluntad política, ni en factores estrictamente

inmediatos, sino en una serie de límites estructurales enraizados en un aparato productivo sumamente precario y cuyas deficiencias no han sido resueltas por las medidas económicas adoptadas a lo largo de una década, sino profundizadas, inclusive, por tales políticas.

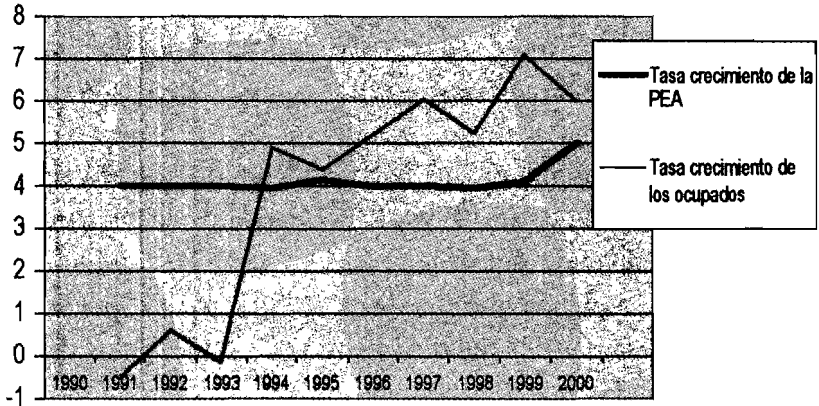
Las características propias del sistema social, asentado en una estructura que propicia la concentración de la riqueza, configuró ciertas condiciones para que las dinámicas de posconflicto derivaran en nuevas formas de exclusión, y estas en nuevas modalidades de desplazamiento colectivo de la población desde sus lugares de origen o residencia. Los sistemas de exclusión han tenido, además, como práctica frecuente el abuso del poder para favorecer el lucro particular de grupos ligados a la elite, bajo formas diversas de apropiación privada de recursos que pudieron haber sido empleados en el desarrollo social. Dicho procedimiento, nada extraño en otras naciones centroamericanas, tuvo en Nicaragua implicaciones sociopolíticas determinantes en un estilo de dominación que patrocina, por esa vía, modalidades de enriquecimiento de diversos grupos independientemente de su signo ideológico.

Mercados laborales, migración y remesas en Nicaragua

El rasgo más importante en el perfil sociodemográfico de la población que emigra desde Nicaragua, es que está constituido por un segmento muy dinámico y joven de la población laboral de ese país. Por ese rasgo, conviene entonces buscar una relación entre las características más recientes del mercado laboral

Gráfico 1

Crecimiento de la PEA y de los ocupados en Nicaragua (1990-1999)



en Nicaragua que expliquen esos movimientos. La fuerza laboral nicaragüense estaba constituida en 1999 por 1.728.900 trabajadores y trabajadoras, equivalente al 35% de la población total del país. De ese conjunto, un total 1.637.100 estaba ocupado. Mientras que entre 1990 y 1999 el conjunto de la fuerza laboral creció en 514.700 personas; el mercado laboral solamente permitió la incorporación de 421.800 personas. La PEA creció a una tasa promedio anual de 4,10% y el empleo solamente lo hizo a una tasa de 3,88% (Gráfico 1). Después de un pronunciado incremento del desempleo hasta 1994, ese indicador comenzó a bajar a partir en los años posteriores para ubicarse en 9% en el 2000. Esa relativa mejora del empleo se explica también por una relativa recuperación de la actividad económica durante la segunda mitad de los noventa; no obstante, el sub-empleo continuó casi invariable; aparte de ello, los salarios promedios reales se han mantenido sin ninguna variación desde comienzos de

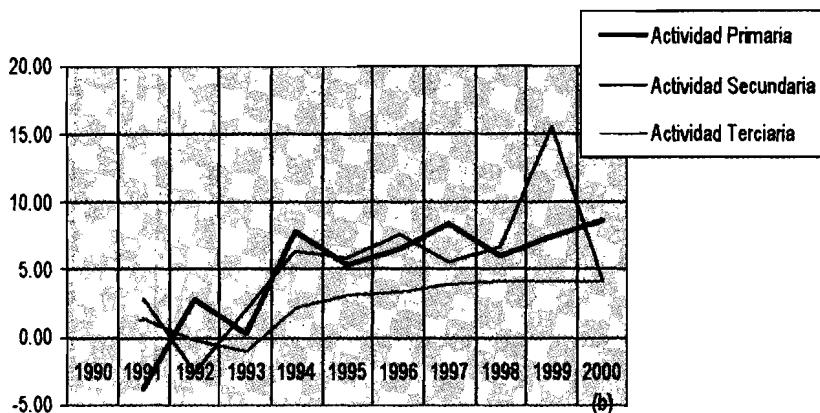
la década. Por otra parte, aún se desconoce el efecto de la migración sobre ese comportamiento del empleo, pero es claro que en Nicaragua la emigración se convirtió en el principal mecanismo de ajuste del mercado de trabajo, después de que las ramas que habían generado empleo en las etapas anteriores alcanzaran puntos de agotamiento.

Pero ese panorama parece haberse detenido con el cambio de década. Aunque entre 1999 y 2000 los datos señalaban una persistente reducción del desempleo, el ritmo del empleo comenzó a crecer menos que la PEA. Dicho fenómeno puede estar asociado a la pérdida del dinamismo de los mercados de trabajo relacionados con la actividad de la construcción que se reactivaron después del huracán *Mitch*, debido naturalmente a una reducción de las inversiones en la reconstrucción (CEPAL: 2000). También se manifestaba una importante caída del empleo en el sector de la manufactura, principalmente en el ramo de las maquilas situación que se ha prolongado hasta el año 2001; además, se continúa observando el estancamiento de los mercados vinculados al sector terciario. El mantenimiento de la actividad del consumo depende de las posibilidades de acceso de las familias a remesas procedentes del exterior.

En otras palabras, el comportamiento del mercado laboral refleja en buena medida una persistente fragilidad en la calidad y estabilidad de los empleos generados. La estructura de empleo descansaba principalmente en las actividades primarias y del sector terciario, lo cual significó concretamente que las ramas de la agricultura en el primer sector y el comercio y los servicios en el sector terciario contribuyeran con la absorción de la oferta de empleo generado durante la década. La contribución

del sector industrial estuvo concentrado básicamente en el empleo en las zonas francas de maquila y en los pequeños establecimientos domiciliarios.

Gráfico 2
Crecimiento de la Ocupación por Sector (1990-2000)



En el sector agropecuario se ha concentrado como promedio anual un 35% de los ocupados de la PEA, y ese porcentaje fue en 2000 de alrededor de un 40%. Las unidades agropecuarias pequeñas y medianas concentraban la mayor parte de la PEA rural; alrededor de 50% de las personas ocupadas en el agro en 1995 eran trabajadores por cuenta propia, lo cual fue resultado de la distribución de tierras que formaron parte de los programas de reforma agraria de los años ochenta.

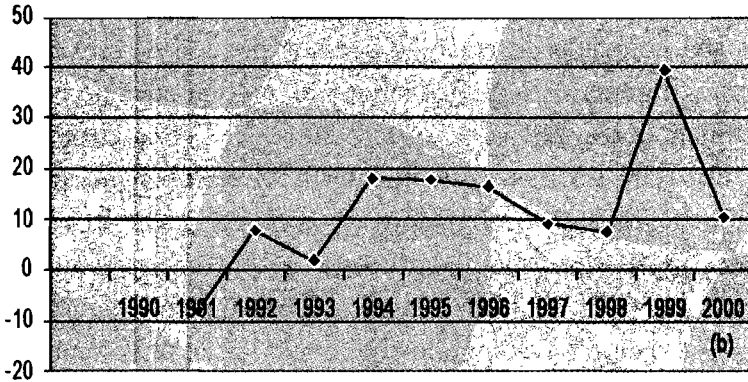
Pese a su importancia en la generación de empleos y al incremento de los niveles de ocupación, la estructura agraria ha mostrado insuficiencias para retener a las masas de población

rural que han dependido de ella para su supervivencia y reproducción. Los principales problemas que han afectado el dinamismo del sector agropecuario continuaban relacionados con la situación jurídica de las propiedades; por una parte, esos problemas estaban relacionados con la privación del acceso a la tierra para una amplia masa de población dedicada a la agricultura;³² por otra, la falta de escrituras en manos de los propietarios y poseedores y, además, los conflictos entre actuales poseedores y antiguos dueños de tierras confiscadas al amparo de la reforma agraria. Pero, aparte del tema de la propiedad, la producción agropecuaria adolece de una enorme falta de incentivos relacionados con las limitaciones de acceso al crédito, la ausencia de programas de capacitación y asesoría agropecuaria, que, aunados a bajos niveles de escolaridad y la fuerte incidencia de la pobreza sobre los hogares rurales, reducen fuertemente las posibilidades de mejorar la productividad del sector, y dificultan las posibilidades de inserción en los canales de comercialización. Las condiciones adversas y la precariedad del empleo rural han sido más severas en el caso de las mujeres que experimentan más intensivamente tanto el desempleo como el subempleo, menor acceso al crédito y a la propiedad.

En consecuencia, uno de los principales hallazgos en esta investigación es la fuerte relación que se presenta entre tales condiciones en el desarrollo del agro nicaragüense y la emigración, tanto de varones como de mujeres que se dirigen principalmente hacia Costa Rica. Es decir la situación recesiva en el agro, se vincula con una mayor incidencia de la pobreza entre la población que vive de la agricultura, y esa es la causa principal de la emigración.

32 Alrededor de 44% de los hogares dedicados a la agricultura no tenían tierras propias, según datos de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida de 1998.

Gráfico 3
Crecimiento del empleo en construcción



Entre tanto, la contribución del sector industrial a la generación de empleos fue muy insuficiente, salvo que básicamente la maquila y las plantas en las llamadas zonas francas han sido las ramas de que han compensado de manera relativa el estancamiento del empleo en el ramo industrial; aunque, como se ha señalado, estos sectores han comenzado a evidenciar señales de estancamiento en los últimos dos años; dada la contracción del mercado de los textiles en Estados Unidos, también puede presumirse que se acentúen los problemas en esas ramas. Es harto sabido que la vinculación de esas actividades con el sistema productivo local se sustenta única y exclusivamente en el uso intensivo de fuerza de trabajo, bajo estándares laborales inferiores a las normas vigentes a escala internacional. La dependencia del mercado de trabajo de ese tipo de ramas productivas produce una creación de empleos de muy baja calidad, sin propiciar incentivos para una mejor formación profesional de la fuerza de trabajo a escala local.

En 1992, las empresas de zonas francas empleaban un 1,3% de trabajadores y trabajadoras industriales, pero ya en 1998 absorbían al 16%. Sin embargo, la mayor parte de la PEA del sector estaba colocada en establecimientos pequeños; el 57% de obreros y obreras industriales laboraban en unidades de menos de 5 trabajadores. De acuerdo con datos del Censo Urbano de 1996, el 87,5% de los establecimientos del sector manufacturero empleaba de 1 a 3 trabajadores; y concentraba al 40,7% del total de empleados de la manufactura. Los establecimientos de mayor tamaño; es decir, de más de 50 trabajadores, generaban el 31,7% del empleo en la industria. Tanto las empresas más pequeñas como las más grandes requerían mayoritariamente el trabajo de las mujeres. Eso estaría indicando claramente que tanto las unidades micro-familiares como las grandes empresas maquiladoras del vestuario continúan dependiendo del aporte laboral femenino.

También el sector construcción, después del breve repunte que había experimentado en 1999, mostró una caída que reprodujo la tendencia recesiva manifestada a lo largo de la década. Luego de un repunte a comienzos de los noventa, prácticamente el empleo en esa rama se había estancado y dependía del desarrollo de algunos proyectos grandes, como la expansión de la planta hotelera y unos pocos centros comerciales. Las inversiones en la reconstrucción posterior al *Mitch*, en 1999, permitieron que la actividad impactara sobre la creación de empleos; sin embargo, en 2000 la tasa de crecimiento del empleo en esa rama retornó a los niveles anteriores. Debido a la ausencia de proyectos habitacionales, como resultado de la falta de financiamiento y los bajos ingresos de los grupos sociales que demandaban vivienda,

la industria de la construcción no solo no ha contribuido a la generación de empleos, sino que tampoco ha tenido un efecto expandido sobre otras ramas de la actividad económica como la industria y los servicios.

El sector terciario que, desde los ochenta, ha jugado un papel importante en la absorción de la fuerza laboral, durante la segunda mitad de los noventa, ha mostrado señales de estancamiento que se han profundizado en el cuatrienio 1997-2000. El predominio de los microestablecimientos es determinante en la dinámica de ese sector y en la demanda del empleo, pues el 92,3% de los 113.410 establecimientos registrados por el censo económico urbano de 1996 empleaban menos de 3 trabajadores. En esas pequeñas unidades se concentraba el 62% del personal de la rama de servicios. Las actividades de comercio al por menor, ventas de comida y servicios personales y comunales han sostenido el empleo en esa rama, aunque su contribución a la generación de empleos prácticamente se ha visto estancada a partir de 1997. La participación de las mujeres se realiza predominante en el pequeño comercio, pero dado que su condición corresponde al cuentapropismo, apenas constituye una opción de supervivencia; es claro que la actividad laboral allí está seriamente afectada tanto por remuneraciones sumamente bajas como por un deterioro de la calidad del empleo, condiciones laborales también muy adversas para el trabajador; así como la exposición constante al subempleo.

Los patrones de empleo vinculados a la emigración sin duda se relacionan con las características antes señaladas del mercado laboral nicaragüense. Los trabajadores migratorios tienden a reproducir en los mercados laborales de destino las prácticas

laborales a las que están acostumbrados en sus territorios de origen. En ese sentido, el mercado de trabajo de Nicaragua cumple una función importante en el suministro de fuerza laboral para las economías regionales y, más allá de ellas, al proveer también una importante oferta de empleo en mercados extrarregionales. Por tal razón, el análisis de la migración laboral no puede hacerse exclusivamente a partir de un análisis aislado de las características del mercado laboral del país de origen, sino de la comprensión de la relación que dicho mercado establece con los mercados de los países de destino.

Aunque los factores de expulsión y atracción han sido altamente utilizados en la literatura que explica la formación y dinámica de los flujos migratorios, conforme ha evolucionado la transnacionalización de la economía y la formación de sistemas económicos regionales, se ha podido constatar que las condiciones económicas y sociales que crean, organizan y sostienen la migración internacional surgen del nivel y el modo en que las economías regionales se han integrado, y no simplemente por condiciones específicas de un solo país, como recesión o crisis en ciertos sectores (Castles y Miller, 1993). Aunque también el fenómeno está asociado a las condiciones de empleo en los países receptores, tampoco sus causas y su dinámica se explican por el solo efecto de atracción económica que ejercen esas economías. En concreto, se observa que en la base de la formación de los flujos migratorios de carácter laboral se produce una transformación de los mercados laborales; aquellos espacios del mercado laboral que coincidían con los esquemas de economías nacionales son rebasados por la formación de mercados transfronterizos y transnacionales, por una parte, y fragmentados a

partir de la constitución de mercados locales, muchos de ellos articulados al exterior bajo la lógica ordenadora del capital, sin conexiones directas con la economía nacional fuera también del control de los Estados nacionales. La formación de mercados laborales a partir del recurso de los trabajadores migrantes muestra tales rasgos de integración transnacional y de fragmentación de mercados, donde el Estado pierde posibilidades de intervenir y de regular.

La migración no es un fenómeno casual ni aislado. Como dinámica social se inscribe dentro de una prolongación de intercambios económicos, sociales y culturales que forman parte de una reconfiguración socio-territorial más amplia de la región centroamericana, y específicamente de su mercado laboral. En cierta literatura se ha priorizado la explicación de la migración como una consecuencia de la integración de ciertos a los circuitos de globalización económica, social y cultural (Castles y Miller, 1998; Stalker, 1999). Sin embargo, esos argumentos no explican suficientemente las dinámicas estructurales que en esa escala más amplia orientan la organización de la oferta de trabajo a escala global y subregional, ni las condiciones que en un espacio territorial específico señalan la relación entre migración y las nuevas características del empleo y las nuevas formas de producción a escala transnacional. La migración corresponde con el desarrollo de nuevas formas de interdependencia estructural entre sociedades de origen y países receptores; entre tal interdependencia, la que se produce entre los mercados laborales de ambos conjuntos contiene los rasgos específicos de la relación capital-trabajo. En concreto, se trata de una extensión territorial de los mecanismos de extracción de valor de la fuerza de

trabajo hacia una escala transnacionalizada. Por lo general, el establecimiento de condiciones de contratación por debajo de los estándares laborales vigentes en los mercados receptores, reforzados por sistemas institucionales que propician la expansión de las formas propias de la migración indocumentada, muestran la privación a la que se ven sometidos los colectivos de trabajadores migrantes y que, a su vez, son viejas formas de sobreexplotación trasladadas a una arena transnacional.

Las posibilidades analíticas de las modalidades en que la migración repercute sobre el espacio social nicaragüense y costarricense son variadas. Una dimensión importante es el análisis de la interacción entre factores económicos y sociales entre la sociedad de salida y la receptora. Esa dimensión corresponde en este estudio con el análisis de dos factores, las características de los mercados laborales, por una parte, y los perfiles socio-demográficos de la población migrante. En los análisis sobre los factores de salida ha quedado demostrado el impacto de la recesión del mercado laboral en la producción de los detonantes económicos de la emigración, tanto hacia los Estados Unidos como a Costa Rica, que son los dos destinos principales de los emigrantes. Por otra parte, el análisis de la demanda de fuerza laboral en el mercado de trabajo costarricense muestra la función subsidiaria que el universo laboral de los inmigrantes está ejerciendo en el aparato productivo costarricense. No obstante, los análisis continúan considerando los mercados laborales de ambos países como universos separados, tal vez como consecuencia de una vieja tradición analítica dicotómica que continúa enfatizando en las dimensiones nacionales de los fenómenos sociales con poca consideración acerca de la construcción de tejidos horizontales

entre conjuntos sociales separados por fronteras impuestas, pero integrados por vínculos comunitarios ancestrales.

Otra dimensión poco conocida es la función de las conductas migratorias dentro de las estrategias de reproducción de la vida social, tanto a nivel macro como dentro de los espacios comunitarios y entre las unidades familiares. En esta investigación se ha considerado importante la función de las remesas en la integración de estrategias de reproducción y sobrevivencia de los núcleos familiares repartidos entre territorios de salida y de recepción.

Migración y subsidiaridad laboral

En consideración a la primera dimensión, la distribución de los trabajadores y las trabajadoras nicaragüenses en los países de recepción tiende a reproducir algunas tendencias de su inserción laboral en su país de origen. De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, en Nicaragua hay dos segmentos del mercado laboral que tienen gran importancia en la creación de empleo, ellos son la agricultura y los servicios. En esos mismos sectores se manifiestan más claramente las opciones laborales que tienen los trabajadores y las trabajadoras nicaragüenses en el exterior, aunque existe también una intensa movilización laboral hacia otros sectores de la actividad productiva, especialmente en el caso de Costa Rica. En efecto, si bien esa misma distribución tiende a manifestarse en el mercado laboral costarricense en relación con la demanda de trabajadores inmigrantes, se ha logrado captar una creciente participación de trabajadores,

varones y mujeres, en diversas actividades de la economía urbana, con especial importancia del sector industrial y la construcción.

Cuadro 5
Actividad laboral de la PEA de los hogares encuestados
(según localización del empleo en porcentajes)

Sector	Localización		Total
	En el país (N=1788)	Fuera del país (N=83)	
Agricultura, ganadería, caza y pesca	20,2	14,5	20,0
Industria, minas, electricidad, gas y agua	18,0	3,6	17,3
Construcción	6,2	10,8	6,4
Comercio	22,6	15,7	22,3
Servicios	33,0	55,4	34,0
Total	100,0	100,0	100,0

$p = .000$

Fuente: Encuesta aplicada en Nicaragua.

Las diferencias entre los dos mercados laborales se presentan justamente en relación con la categoría del trabajador o la trabajadora, pues en Nicaragua los trabajadores son en su mayoría tanto asalariados (39,7%) como cuenta propia (32,9%). Esta última categoría, la del cuentapropismo, resulta relevante tanto en la agricultura como en el comercio y en los servicios. No obstante, los trabajadores nicaragüenses que trabajan fuera de su país son mayoritariamente asalariados (50,6%), o empleadas

domésticas (31,3%) que también es una forma de trabajo asalariado. El empleo público, los patronos y trabajadores familiares tienen representación prácticamente solo en Nicaragua.

Cuadro 6
Actividad laboral de la PEA de los hogares encuestados
(por sexo en porcentajes)

Actividad	Sexo		Total (N=1899)
	Varón (N=1166)	Mujer (N=733)	
Agricultura, ganadería, caza y pesca	28,6	6,5	20,1
Industria, minas, electricidad, gas y agua	16,5	18,4	17,2
Construcción	9,9	1,0	6,5
Comercio	18,3	28,8	22,3
Servicios	26,8	45,3	33,9
Total	100,0	100,0	100,0

$p = .000$

Fuente: Encuestas aplicadas.

Las diferencias por sexo también resultan relevantes, pues los empleos de los varones se concentran más en la agricultura (28,6%), los servicios (26,8%) y el comercio (18,3%); y las mujeres se colocan mayoritariamente en los servicios (45,3%), el comercio (28,8%) y la manufactura (18,4%). Esas diferencias pueden cambiar dependiendo del país de recepción, pues la

información obtenida desde Costa Rica señala que el sector de la construcción es altamente demandante de fuerza de trabajo inmigrante. Evidentemente, las diferencias entre los datos captados en Costa Rica con los datos captados en Nicaragua tienen alguna relación con la fuente de información; en Nicaragua, la información fue obtenida de parientes nicaragüenses de los inmigrantes que muchas veces no tenían información cierta sobre el tipo de empleo de sus familiares que no vivían en el país.

Aparte de factores históricos y culturales que cruzan de forma horizontal las interacciones entre Costa Rica y Nicaragua (Morales, 1997), persiste un sustrato económico que actualmente moviliza el flujo subregional de las migraciones desde Nicaragua hacia Costa Rica. En efecto, las estructuras productivas y los mercados laborales de ambos países, como se ha constatado en este estudio,³³ mantienen entre sí un conjunto de asimetrías que explican que entre ellos no exista una dinámica competitiva, sino más bien complementaria, favorable para procesos de integración sustentados en su base material y social. Como se explicará más adelante, la composición de los mercados laborales de ambos países muestra como característica principal entre ellos, una gran asimetría. No obstante, los rasgos asimétricos facilitan, en virtud de los mecanismos de atracción y oferta de empleo, un reordenamiento de esos mercados laborales, donde la migración cobra suma importancia como factor común de producción.

33 También trabajos anteriores han permitido avanzar en el conocimiento de la complementariedad de los mercados laborales de ambos países, así como sobre la inserción de trabajadores y trabajadoras nicaragüenses en el mercado laboral costarricense. Además, otros estudios también han profundizado respecto de esta misma problemática (Pisoni, 2000; Proyecto Estado de la Nación, 2001).

En consecuencia, la emigración no debe explicarse tan solo como resultado de la influencia de factores de expulsión en las sociedades desde donde sale la población emigrante, sino como el producto de la combinación de factores comunes entre esas sociedades y las de destino. Esos factores comunes se encuentran en la conformación de un mercado laboral de características subregionales entre Nicaragua y Costa Rica, donde la fuerza de trabajo nicaragüense no solo se convierte en un recurso complementario para las demandas de empleo del aparato productivo del segundo país, sino también en un recurso subsidiario para un sinnúmero de actividades productivas que, de no disponer de dicho recurso, estarían bajo un fuerte riesgo recesivo.

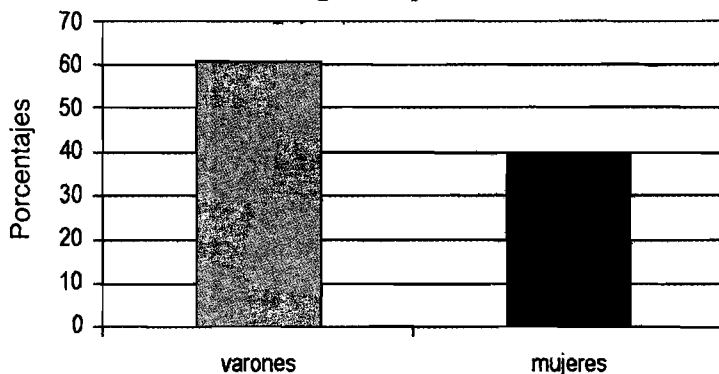
Por otra parte, el carácter complementario y subsidiario de la fuerza laboral inmigrante dentro del territorio social binacional entre Nicaragua y Costa Rica resulta característico de un nuevo proceso de transnacionalización y centroamericanización de la fuerza laboral en el istmo. Efectivamente, en Centroamérica es cada vez más palpable la diseminación a escala regional de formas de producción y mecanismos de acumulación de capitales. Los mercados antiguamente constreñidos a las sociedades nacionales se han convertido en un obstáculo para la reproducción económica, ciertas inversiones rebasan de manera creciente y constante los bordes limítrofes entre países, reñidas muchas veces con legislaciones excluyentes, pero creando en la práctica sistemas regionales de inversión y comercio que se revelan como manifestaciones palpables de una integración transnacionalizada e irrefutable. Como consecuencia, uno de los factores de producción que rápidamente se regionaliza y transnacionaliza es la fuerza de trabajo, que encuentra en la migración

transfronteriza uno de los mecanismos a partir de los cuales se ordena territorialmente. Conforme la fuerza laboral se regionaliza, no solo para asegurar su reproducción social o como mero mecanismo de supervivencia, sino también como requisito impuesto por la actividad productiva, también se diseminan a escala regional las formas de exclusión socioeconómica, las formas de explotación laboral se amplían y la contradicción capital-trabajo también se expande a escala regional.

Esas formas subordinadas a las características de una diáspora migratoria se ven agravadas por otros factores: la negación de derechos para el flujo de indocumentados, considerablemente alto entre las fronteras centroamericanas, y el rechazo socio-cultural que experimentan los extranjeros privados de fortuna en las sociedades receptoras.

Los resultados de la encuesta aplicada a escala nacional en Nicaragua confirman la importancia del mercado laboral costarricense para la colocación de una población laboral supernumeraria, originaria principalmente de comunidades rurales, aunque con un peso también relativamente importante de población también urbana. Los asentamientos de los hogares vinculados a los flujos de la migración son indistintamente rurales y urbanos, ya que la comparación entre ambos conglomerados no señala diferencias estadísticamente importantes. De igual manera, las razones de la emigración entre ambos conjuntos están relacionadas con la situación del empleo.

Gráfico 4
Emigración por sexo



Por ejemplo, al computar una consulta a una muestra de 1.200 hogares en todo el país, se determinó que en un 9,6% de ellos reconocieron que algún pariente suyo había emigrado al exterior durante 1999 y 2000. No se trataba en su totalidad de emigrantes nuevos, pues un porcentaje de ellos ya había incurrido dentro del circuito migratorio al menos una vez durante la década o bien antes. Sin embargo, la media de los emigrantes había salido al exterior por primera vez en 1988, pero el grupo más grande solamente lo había hecho apenas en 1999. De acuerdo con los datos de la consulta, del total de la muestra se identificó a un 20% de los hogares vinculados a la migración. Un 17% de los hogares tenía vínculos con la migración antes de 1999, y el casi 3% restante se vinculó a la migración entre 1999 y 2000. Si además de los hogares que reconocieron tener parientes en el exterior, se suma a aquellos hogares que se declararon como receptores de remesas, el conjunto de unidades familiares ligados a la migración no se reduce a aquellos que en un momento determinado tienen a algún pariente fuera del país.

El destino principal de ese movimiento fue Costa Rica, pues mientras que un 61,7% de esos hogares tuvieron al menos un emigrante que se dirigió hacia ese país, los hogares con emigración hacia Estados Unidos fueron un 38,3% del total de hogares con emigración. La concentración de la migración en Costa Rica se explica principalmente por facilidades logísticas y geográficas que hacen relativamente más viable y menos costoso, tanto desde el punto de vista económico como humano, la emigración. Muy posiblemente también pudo haber incidido sobre la emigración la apertura en ese país de un sistema para facilitar la documentación de inmigrantes de todos los países del resto de la región y que fueron afectados por el huracán *Mitch*. Debido a que los nicaragüenses conforman el grupo más numeroso, esta medida pudo haber ejercido también una fuerza de atracción para nuevos y viejos inmigrantes³⁴.

La participación de las mujeres en la formación de los circuitos migratorios adquiere una importancia no siempre visible y reconocida a partir de los resultados estadísticos; esa función aparece más claramente visible a partir del establecimiento de redes. En el periodo emigraron más hombres que mujeres en una proporción del 60% de varones, frente a un 39,1% de mujeres. Ese dato contrasta con las estadísticas más recientes obtenidas en Costa Rica que indican un porcentaje más bajo de varones en la migración; sin embargo, en este dato no se considera a una alta proporción de varones que no son captados por los instrumentos de la encuesta de hogares dado que migran por periodos menores

34 En efecto, de acuerdo con un estudio realizado al momento de aplicación del Régimen de Excepción Migratoria para los residentes de otros países centroamericanos en Costa Rica, aplicado a finales de 1998, un 98% de las personas que aplicaron eran originarios de Nicaragua (Morales, 1999).

a seis meses, o bien sea porque no permanecen en viviendas habituales, sino en instalaciones de los propios establecimientos donde laboran o inclusive porque permanecen en aglomeraciones cuyo tamaño no corresponde con el de la muestra encuestada. No obstante, en las proporciones estadísticas entre hombres y mujeres podrían no residir las diferencias sustantivas entre esos dos conjuntos, por lo que este tipo de análisis amerita consideraciones más cualitativas.

Un 44,3% de los emigrantes eran jefes o jefas de hogar y el 65,7% restante eran otros miembros de los hogares, en su mayoría hijos o hijas. El 72,5% de los jefes que emigraron eran varones y el restante 27,5% fueron mujeres jefas de hogar. En la mayoría de los hogares se registra una migración más alta de varones sin responsabilidad como jefes de hogar; sin embargo, tanto la diferencia entre varones y mujeres jefes y no jefes que emigraron en el periodo analizado no resulta significativa a partir de su comparación estadística. Los datos no dejan duda acerca de la plena incorporación de las mujeres dentro de ese proceso de transnacionalización de la fuerza laboral nicaragüense; la simple comparación con la situación de los varones no solo reporta pocas diferencias estadísticas sino que puede ocultar otras diferencias cualitativamente, más importantes. Entre estas diferencias está el hecho de que casi la mitad de los hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer están relacionados con la migración de varias maneras, ya sea porque la misma mujer jefa de familia ha emigrado, o bien porque algún otro miembro del hogar emigró, y en ambos casos porque el sostenimiento del hogar depende en alguna proporción de la obtención de medios de subsistencia en el exterior. En el análisis caben también antes otras argumentaciones.

Cabe tomar en cuenta en este análisis que el periodo que se considera coincide con los años posteriores a la catástrofe del huracán *Mitch*. Los resultados no permiten identificar claramente la forma mediante la cual ese fenómeno pueda haber incidido directamente en un cambio de los patrones migratorios, en particular en los perfiles sociodemográficos de los individuos y en su destino. Sin embargo, para precisar algunas características es importante prestar atención a algunos de los resultados.

Las diferencias entre los territorios de origen son importantes al comparar diversas regiones, así constituidas en razón del análisis. De acuerdo con ello, el peso como territorio de salida de la migración difiere entre cinco territorios diferenciados entre sí para facilitar cierta comparación. Esas diferencias tienen importancia en relación con varias características. También resultaron interesantes las diferencias a partir del origen rural o urbano de los hogares de los emigrantes y la relación entre esas variables y el país de destino de la migración.

Los sitios desde los cuales se originaba una mayor emigración, a partir de los datos de la encuesta, se situaron en la subregión conformada por los departamentos de Boaco, Chontales, la región de Zelaya y el Atlántico Sur. Esa es una región que registra un flujo migratorio constante, y cuyo destino principal es Costa Rica, a través de la frontera y el río San Juan. La alta incidencia de la migración hacia Costa Rica desde esos territorios concuerda también con anteriores investigaciones ya realizadas en algunos de esos mismos sitios (Morales, 1997). Pero, en segundo lugar, tienen importancia los departamentos de Occidente, que son León y Chinandega, cuya importancia como asentamientos desde los cuales se origina una fuerte emigración que